



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FSM 8870/2021/CA2

///doba, 29 de abril de 2026.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "E [REDACTED] A [REDACTED], Diego Juan; E [REDACTED], Gonzalo y A [REDACTED] Elba Ester s/ Infracción art.303" (FSM 8870/2021/CA2), venidos a conocimiento de la Sala B en virtud de los recursos de apelación *in pauperis* interpuestos por los imputados Diego Juan E [REDACTED] A [REDACTED] y Elba Ester A [REDACTED] y fundados técnicamente por su defensor, el doctor Gastón S [REDACTED], en contra de la resolución del Juzgado Federal N°1 de Córdoba, dictada con fecha 12.05.2025, en cuanto dispuso: "**II.- ORDENAR EL PROCESAMIENTO - sin prisión preventiva- de Diego Juan E [REDACTED] A [REDACTED] - ya filiado -** como autor responsable del delito Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (art. 268.2 y 45 del C.P.) -hecho primero- y de Lavado de Activos Agravado (art. 303 inc. 2 b y 45 del C.P.) hecho segundo, en concurso real (art. 55 del C.P.); **de Elba Ester A [REDACTED] - ya filiada -** como partícipe necesaria del delito de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos - en calidad de persona interpuesta - (art. 268.2 y 45 del CP) y coautora del delito de Lavado de Activos Agravado (art. 303 inc. 2 b y 45 del C.P.) hecho segundo, en concurso real (art. 55 C.P.), todo conforme lo previsto por los arts. 306 y 310 del CPPN. **III.- TRABAR EMBARGO** sobre los bienes de: **a) Diego E [REDACTED] A [REDACTED]**, hasta cubrir la suma de quince millones de pesos, **b) Elba Ester A [REDACTED]**, hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos o en su defecto inhibirlos de su libre disposición. (art. 518 C.P.P.N.)."

Y CONSIDERANDO:

USO OFICIAL

Fecha de firma: 29/04/2026

Alta en sistema: 05/05/2026

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#35622656#499015145#20260429130525303

I.- Los presentes autos llegan a conocimiento de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por los incoados Diego Juan E [REDACTED] A [REDACTED] y Elba Ester A [REDACTED] *in pauperis* y fundados técnicamente por su defensor, el doctor Gastón S [REDACTED], en contra de la resolución dictada con fecha 12.5.2025 por el Juzgado Federal N°1 de Córdoba, cuya parte resolutive fue precedentemente transcripta.

II.- En la resolución mencionada, el señor Juez Federal dispuso el procesamiento de Diego Juan E [REDACTED] A [REDACTED] -funcionario de la Aduana- como autor responsable del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público, en concurso real con el delito de lavado de activos. De manera concomitante, atribuyó a Elba Ester A [REDACTED] la participación en dicho enriquecimiento como persona interpuesta y la coautoría en la maniobra de lavado, entendiendo que ambos articularon la estructura de ocultamiento patrimonial.

Para así decidir, en primer lugar, analizó la plataforma fáctica que dio origen a la presente causa. Se explayó bajo el entendimiento de que el **Hecho Nominado Primero** se circunscribe al incremento patrimonial apreciable e injustificado del enrostrado Diego Juan E [REDACTED] A [REDACTED], quien en su condición de funcionario de la Dirección General de Aduanas habría acumulado un acervo de metales preciosos que no guarda correlación con sus ingresos legítimos, logrando un incremento patrimonial en forma apreciable e injustificable por la suma total de \$6.249.768.

Este suceso se cristalizó operativamente el 25 de junio de 2021, cuando en un control de Gendarmería





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FSM 8870/2021/CA2

USO OFICIAL

Nacional sobre la Ruta Nacional 9 km 129.5 de la localidad de Alsina, Partido de Baradero de la provincia de Buenos Aires, se produjo el secuestro de 4 lingotes de oro fino de 50 gramos tasados en \$1.820.000, 20 lingotes de plata de 1000 gramos valuados en \$2.400.000 y 9 monedas de oro fino de 22 quilates en \$2.029.768 que eran transportados por su hijo, Gonzalo E [REDACTED], -con sentencia de sobreseimiento firme en la presente- en el interior del baúl de un vehículo Volkswagen Vento dominio MTN604, en dirección al domicilio del dueño de los elementos recientemente mencionados; su progenitor, Diego Juan E [REDACTED] A [REDACTED], situado en la provincia de Córdoba.

Al respecto, el Magistrado consideró que la desproporción detectada constituye una sospecha razonable de enriquecimiento ilícito, toda vez que el imputado no logró acreditar fehacientemente que la adquisición de dichos activos fuera el resultado de su actividad laboral declarada o de un ahorro familiar previo con respaldo documental. En esta senda, entendió que, entre el 10.01.2021 y el 25.6.2021, Diego Juan E [REDACTED] A [REDACTED] habría convertido dinero proveniente del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público (penado por el art.268 2 del CP) disimulando u ocultando su procedencia para darle apariencias lícitas a su origen.

Contempló que con el dinero proveniente de su accionar ilícito, el encartado Diego Juan E [REDACTED] A [REDACTED] habría adquirido de la firma Walter Enrique L [REDACTED] en fecha próxima al 25 de junio de 2021, 4 lingotes de oro de 50 grs. cada uno por un valor de \$1.820.000 y 20 lingotes de plata de 1000 gramos cada uno por un valor de \$2.400.000, declarando en su DDJJ patrimonial integral

Fecha de firma: 29/04/2026

Alta en sistema: 05/05/2026

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#35622656#499015145#20260429130525303

correspondiente al periodo 2021 presentada durante el 2022 que habían sido documentada mediante las facturas B N°00002-00000003 y 00002-00000004 emitidas a su nombre con posterioridad al secuestro de los elementos mencionados, en fecha 2.7.2021, por un importe de \$2.400.00 y \$1.820.000. Al respecto, por un lado, el Instructor valoró que la sola existencia de facturas no purga la ilicitud del origen de los fondos utilizados para tal compra y que los fondos fueron declarados con posterioridad a su secuestro.

En añadidura, ponderó que no resulta verosímil el argumento expuesto por la defensa, según el cual los recursos económicos habrían tenido origen en un juicio que Martín E. [REDACTED] M. [REDACTED] – padre de Diego Juan E. [REDACTED] A. [REDACTED] y cónyuge de Ester A. [REDACTED] – habría ganado a la ANSES en el año 2000. De dicho juicio habría resultado una condena contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, ordenando el pago de una indemnización por la suma de \$112.111,03 en concepto de retroactivo. Sin embargo, el Instructor esclareció dicho argumento exculpante indicando que de los autos caratulados “E. [REDACTED] M. [REDACTED], Martín c/ANSES s/Ejecución de Sentencia” (FCB [REDACTED] 17/2001), tramitados ante el Juzgado Federal N.º 2 de la ciudad de Córdoba, surge que recién el 11 de agosto de 2022 se ordenó el pago por parte de ANSES a favor de E. [REDACTED] M. [REDACTED], por la suma de \$24.146.039,49, más los intereses correspondientes desde el 1 de noviembre de 2020 hasta su efectivo pago. De ello se desprende claramente que la fecha de la sentencia devino con posterioridad al secuestro de los metales, ocurrido el 25 de junio de 2021.

Fecha de firma: 29/04/2026

Alta en sistema: 05/05/2026

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#35622656#499015145#20260429130525303



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FSM 8870/2021/CA2

USO OFICIAL

Al respecto, el Instructor destacó algunos aspectos de la pericia contable que se llevó a cabo en la presente causa. Surge de la misma que tanto las monedas de oro como los lingotes de oro y plata secuestrados, fueron exteriorizados por el imputado E [REDACTED] A [REDACTED] en su Declaración Jurada Patrimonial Integral de 2021, rectificativa 2, presentada el 09/06/2022 y presentaciones posteriores, así como en la Declaración Jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales período 2021, rectificativa 2, 18/12/2023, sin haberlas declarado antes.

Por su parte, el **Hecho Nominado Segundo** se desplaza hacia la figura del lavado de activos, describiendo la maniobra mediante la cual Diego Juan E [REDACTED] A [REDACTED] y Elba Ester A [REDACTED] habrían intentado introducir los bienes de origen espurio en el mercado legal para otorgarles una apariencia de licitud. En esta etapa, el Magistrado analizó la utilización de una estructura de simulación centrada en un contrato de donación de monedas de oro y la suma de \$800.000, en el cual Elba Ester A [REDACTED] intervino como "persona interpuesta" para justificar la tenencia de los activos a nombre de su hijo. El señor Juez Federal consideró que esta conducta no fue un acto de liberalidad genuino, sino una estrategia diseñada para ocultar el enriquecimiento ilícito del funcionario, integrando así una maniobra pluriofensiva contra el orden económico y la administración de justicia.

Respecto de este segundo hecho, el juzgador observó con severidad la carencia de "fecha cierta" en el instrumento privado de donación, toda vez que el contrato

Fecha de firma: 29/04/2026

Alta en sistema: 05/05/2026

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#35622656#499015145#20260429130525303

de donación fue fechado el 10.1.2021 -esto es, con anterioridad al procedimiento en el que se secuestraron los valores-, fue certificado ante escribano público el 2.5.2022, casi un año después de la incautación de los bienes. El Magistrado adujo que esta certificación posterior constituye un indicio de simulación jurídica orientada a fabricar una prueba de descargo sucesiva a la comisión del hecho delictivo, lo que lo llevó a concluir que la Sra. A [REDACTED] actuó conscientemente ejecutando el andamiaje necesario para el reciclaje de los activos.

Asimismo, ponderó que la sumatoria de estas acciones, al superar el umbral de punibilidad de la Ley 27.739, justifica plenamente el procesamiento de ambos bajo el cargo de lavado de activos agravado, manteniendo la sospecha de que la voluntad de los encartados estuvo siempre dirigida a sustraer el patrimonio del control estatal.

En lo atinente a la aplicación de la ley penal más benigna, el juzgador analizó el impacto de la reforma introducida por la Ley 27.739 sobre el artículo 303 del Código Penal, evaluando el nuevo umbral de punibilidad fijado en ciento cincuenta salarios mínimos, vitales y móviles. Tras realizar el cotejo económico pertinente, el Juez Federal N°1 de Córdoba concluyó que la sumatoria de los activos incautados -valorados en doscientos diecinueve salarios mínimos- supera holgadamente la condición objetiva de punibilidad exigida por la normativa vigente.

Finalmente, la resolución definió la situación procesal de los implicados mediante el dictado del procesamiento sin prisión preventiva para Diego Juan





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FSM 8870/2021/CA2

USO OFICIAL

E [REDACTED] A [REDACTED] y Elba Ester A [REDACTED]. Para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias, el decisorio dispuso la traba de embargos por las sumas de quince y cinco millones de pesos respectivamente, medidas que el juez justificó en la necesidad de cautelar bienes que guarden proporcionalidad con la magnitud de los ilícitos contra el orden económico y la administración pública que se investigan.

III. Con fecha 27 de mayo de 2025 el abogado defensor de Diego Juan E [REDACTED] A [REDACTED] y Ester Elba A [REDACTED], doctor Gastón S [REDACTED], presentó la fundamentación de los recursos de apelación interpuestos *in pauperis* por sus defendidos.

Se advierte como agravio central la denuncia de una manifiesta arbitrariedad en la valoración de las pruebas, fundamentada en que el Magistrado de grado habría omitido considerar elementos documentales y periciales que acreditan la inocencia de los imputados.

De este modo, la parte recurrente postuló que existe un error de enfoque al unificar la situación jurídica de las nueve monedas de oro con la de los lingotes de plata y oro, toda vez que ambos conjuntos de bienes poseen orígenes y regímenes jurídicos sustancialmente distintos que no han sido debidamente ponderados en la resolución. Respecto de las monedas, alegó que estas pertenecen legítimamente a Ester Elba A [REDACTED], habiendo sido adquiridas con el producto de un juicio de reajuste de haberes contra la ANSES cuyos pagos datan de los años 1993 y 2000, periodo en el cual la paridad cambiaria permitía una capacidad de ahorro significativa que fue desoída por el juzgador.

Fecha de firma: 29/04/2026

Alta en sistema: 05/05/2026

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mí) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#35622656#499015145#20260429130525303

Por otra parte, la defensa se agravio por la descalificación del contrato de donación, argumentando que se trata de un acto jurídico válido bajo la normativa civil donde la tradición del objeto perfecciona el acto, y que la demora en la certificación de firmas encuentra una justificación plena en la situación de emergencia sanitaria. En añadidura, puso de resalto que la Sra. A [REDACTED], al ser una mujer de avanzada edad y formar parte del grupo de alto riesgo durante la pandemia, no podía ser obligada a concurrir a una escribanía en enero de 2021 sin poner en peligro su vida, por lo que la certificación realizada en mayo de 2022 no debe interpretarse como una maniobra fraudulenta, sino como una regularización efectuada una vez obtenida la inmunización mediante la tercera dosis de la vacuna.

En cuanto a los lingotes, afirmó que su adquisición fue una operación comercial lícita, respaldada por facturas emitidas conforme a las reglamentaciones de ARCA y dentro de los plazos legales, lo que desvirtúa cualquier sospecha de ocultamiento o procedencia espuria de los fondos.

Finalmente, la crítica se extendió a la interpretación de la pericia contable oficial, la cual concluyó que el incremento patrimonial de E [REDACTED] A [REDACTED] se presenta como razonablemente justificado si se valida la donación materna, otorgándole un excedente de consumo que el Magistrado decidió ignorar de manera caprichosa. Asimismo, la defensa introduce un agravio sustancial relativo a la tipicidad del lavado de activos, sosteniendo que incluso si se cuestionara la donación, el monto de las monedas involucradas no alcanza el umbral de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FSM 8870/2021/CA2

USO OFICIAL

ciento cincuenta salarios mínimos, vitales y móviles exigido por la Ley 27.739 como condición objetiva de punibilidad. Bajo esta premisa, se concluye que la persecución penal resulta desproporcionada y contraria al principio de *ultima ratio*, solicitando por tanto la revocación del procesamiento y el sobreseimiento de los encartados ante la inexistencia de un enriquecimiento injustificado o de una estructura de reciclaje de activos.

III.- Radicados los autos ante esta Alzada, con fecha 05.06.2025, el doctor Gastón S. [REDACTED], presentó el informe previsto en el art. 454 del CPPN. Allí, mantuvo los fundamentos vertidos previamente en el recurso de apelación interpuesto el 27.05.25, los cuales dio por reproducidos en su totalidad en virtud del principio de brevedad procesal.

IV. Resumidas en los precedentes párrafos las diferentes posturas, el Tribunal abordará la presente cuestión correspondiendo expedirse en primer lugar, a la doctora Liliana Navarro, en segundo lugar, al doctor Abel G. Sánchez Torres y, en tercer lugar, al doctor Eduardo Ávalos. (fs. 790).

La señora Juez de Cámara, doctora Liliana Navarro, dijo:

Examinadas que fueran las constancias de la causa, en particular los fundamentos expuestos por el señor Juez Federal interviniente y los argumentos esgrimidos por el recurrente para dar sustento a su pretensión, corresponde a la Suscripta emitir criterio en orden a las cuestiones planteadas.

En tal sentido, puntualmente en lo atinente a la responsabilidad penal de los imputados debo señalar

Fecha de firma: 29/04/2026

Alta en sistema: 05/05/2026

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#35622656#499015145#20260429130525303

que adhiero en términos generales al criterio y fundamentos expuestos por el Instructor en el auto bajo recurso, a los que me remito y doy aquí por reproducidos (conf.art.455 - a *contrario sensu* - del CPPN).

En efecto, la apreciación prudencial de las circunstancias expuestas en autos por el Instructor y valoradas aquí, me conducen al rechazo de los agravios deducidos por la defensa y a la confirmación del auto de procesamiento apelado respecto de ambos imputados. Los extremos que surgen de los elementos de convicción arrimados al proceso, particularmente la prueba informativa, documental, pericial y testimonial, como el análisis integral de los presentes actuados, aspectos todos estos debidamente plasmados en el auto bajo recurso, permiten tener por acreditado no sólo la existencia del accionar ilícito de los encartados, sino que son también suficientes para sostener, con el grado de probabilidad exigido en la instancia, la participación y responsabilidad de aquellos en el mismo.

Por añadidura a lo ya expuesto por el magistrado de grado respecto a la anacronía de los fondos de la ANSES, debe agregarse que el estándar probatorio en esta etapa no requiere la certeza absoluta propia de una sentencia definitiva, sino una convicción fundada en elementos de cargo que permitan inferir razonablemente la ilicitud del incremento patrimonial. En esta inteligencia, el deber de transparencia que pesa sobre Diego Juan E [REDACTED] A [REDACTED], en su calidad de funcionario de la Dirección General de Aduanas, no es una mera formalidad administrativa, sino una carga ética y jurídica reforzada por las convenciones internacionales





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FSM 8870/2021/CA2

USO OFICIAL

contra la corrupción. Consecuentemente, el hecho de que el encartado no haya podido trazar de manera contemporánea el origen de los metales preciosos secuestrados genera una presunción de ilicitud que la defensa no ha logrado quebrantar mediante la invocación de ahorros históricos de los años noventa, puesto que la trazabilidad financiera exige una continuidad documental que no se habría logrado demostrar.

Respecto a la situación de Ester Elba A. [REDACTED] y la tacha de inoponibilidad del contrato de donación, corresponde adicionar un análisis sustancial sobre la teoría de la simulación en el ámbito del derecho penal económico. Si bien la defensa aduce que la pandemia de COVID-19 operó como un obstáculo de fuerza mayor para la certificación notarial, este Tribunal debe señalar que la "fecha cierta" regulada en el artículo 317 del Código Civil y Comercial constituye una garantía de orden público frente a la pretensión punitiva del Estado. En tal sentido, un instrumento privado que adquiere certeza documental casi un año después de que los bienes ya han sido incautados, pierde toda aptitud para conmovir la hipótesis de lavado de activos. Por lo tanto, no se trataría únicamente de una demora administrativa, sino de la inexistencia de efectos jurídicos frente a terceros al momento del hallazgo, lo que permite concluir que la intervención de la Sra. A. [REDACTED] se ajustó a la figura de la persona interpuesta, cuya finalidad última fue dotar de una apariencia de licitud *post-factum* a activos que carecían de respaldo en el perfil patrimonial del funcionario público.

Fecha de firma: 29/04/2026

Alta en sistema: 05/05/2026

Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: MARIO ROQUE OLMEDO, SECRETARIO DE CÁMARA



#35622656#499015145#20260429130525303

Finalmente, en lo atinente a la aplicación de la Ley 27.739 como ley penal más benigna, resulta indispensable agregar una interpretación teleológica que descarte el intento defensivo de fragmentar las operaciones para eludir el umbral de punibilidad. La defensa pretende que el análisis de los ciento cincuenta salarios mínimos, vitales y móviles se realice de forma aislada sobre cada activo, ignorando que el lavado de activos es un proceso complejo que puede integrarse por múltiples actos vinculados por una unidad de designio criminal.

Bajo esta lógica de "unidad de maniobra delictiva", la sumatoria de los lingotes de plata, el oro fino y las monedas de oro debe ser valorada como una masa patrimonial única destinada al reciclaje de activos de origen espurio. Dado que el monto total de la operación bajo sospecha asciende a doscientos diecinueve salarios mínimos, la conducta mantiene su plena tipicidad objetiva, reforzando la necesidad de que la instrucción avance hacia la etapa de plenario para debatir, con el rigor propio del juicio oral, la responsabilidad definitiva de quienes, mediante el enturbiamiento de los flujos económicos, han vulnerado el bien jurídico tutelado por la norma.

En definitiva, considero que los argumentos defensivos expuestos en el recurso deducido sólo se presentan como meros intentos de colocar a los encartados en mejor posición frente al proceso y, a la luz de los demás elementos probatorios existentes, no logran desmerecer los actos procesales cumplidos ni conmovir el mérito convictivo existente y habilita a sostener la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B
FSM 8870/2021/CA2

USO OFICIAL

responsabilidad penal de los encartados por su participación dolosa en el accionar objeto de imputación.

De tal modo, el cúmulo probatorio me permite pronunciarme por el rechazo del recurso deducido y por la confirmación de los procesamientos dispuestos respecto de los encartados Diego Juan E [REDACTED] A [REDACTED] y Elba Ester A [REDACTED] mediante el auto de fecha 12.05.2025, compartiendo, reitero, la valoración efectuada por el Juez de primera instancia a lo largo del resolutorio puesto en crisis, que aquí se da por reproducida (conf. Art 455 - a contrario sensu - del CPPN).

El señor Juez de Cámara, doctor Abel G. Sánchez Torres, dijo:

Comparto los fundamentos y la solución propuesta por la señora Juez de primer voto, doctora Liliana Navarro, por lo que me pronuncio en igual sentido. Así voto.

El señor Juez de Cámara, doctor Eduardo Ávalos, dijo:

Adhiero a las consideraciones y conclusión a la que arriba la señora Juez de primer voto, en consecuencia, me expido en idéntico sentido. Así voto.

SE RESUELVE:

I. CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 12 de mayo de 2025 por el Juzgado Federal N°1 de Córdoba, en cuanto dispuso el procesamiento de **Diego Juan E [REDACTED] A [REDACTED]** como autor responsable del delito Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (art. 268.2 y 45 del C.P.) -hecho primero- y de Lavado de Activos Agravado (art. 303 inc. 2 b y 45 del C.P.) hecho segundo,



en concurso real (art. 55 del C.P.) y de **Elba Ester A** [REDACTED] como partícipe necesaria del delito de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos - en calidad de persona interpuesta - (art. 268.2 y 45 del CP) y coautora del delito de Lavado de Activos Agravado (art. 303 inc. 2 b y 45 del C.P.) hecho segundo, en concurso real (art. 55 C.P.).-

II. Sin costas (art. 530 y 531 del CPPN).

III. Regístrese y hágase saber. Cumplimentado, publíquese y bajen.

LILIANA NAVARRO
JUEZ DE CÁMARA

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES
JUEZ DE CÁMARA

EDUARDO AVALOS
JUEZ DE CÁMARA

MARIO R. OLMEDO
Secretario de Cámara

